

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL 2018

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11452-05

REFERENCIA	Ley de Presupuestos del sector público para el año 2018
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Cámara de Diputados
MINISTERIOS	De Hacienda
INGRESO	30 de septiembre de 2017
ARTICULADO	27 artículos

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

Sorprenden las expectativas positivas en torno a la recuperación para justificar el aumento del gasto público, de un 3,9% para el 2018. Ello, porque en la presentación del Presupuesto se argumentó un aumento de las cifras de empleo, remuneraciones, inversión, índices de confianza y el comportamiento de la bolsa, lo cual no se condice con la realidad del país. No se puede dar por asegurado el crecimiento económico, sobre la base de lo planteado por el gobierno, y menos la consolidación del mercado laboral, cuando aun se observa una reducción de asalariados privados. Solo crecen el sector asalariado público y cuenta propia. Si bien las expectativas han mejorado, siguen en terreno negativo, donde cabe recordar que la inversión para 2017 fue corregida a la baja por el Banco Central de Chile de -0,9 a -1,6% para este año.

De esta forma, el crecimiento del gasto de 3,9% sólo sería consistente con una reducción del déficit si hubiera estimaciones de ingresos estructurales muy favorables. Aquí es donde toman mayor protagonismo los supuestos con los que se construyó el proyecto de ley.

Sin embargo, el Gobierno mantiene su trayectoria de gasto, a saber, el crecimiento del PIB ha promediado estos últimos 4 años un 1,8% anual, mientras que el gasto fiscal ha aumentado en el Presupuesto en torno al 5,7%. Además en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, el gasto promedio fue de 10,5%, mientras que el crecimiento fue de sólo 3,3%. Hoy se presenta un presupuesto con las mismas características: crecimiento del déficit y endeudamiento público.

El Gobierno desperdició cuatro años relegando la importancia del crecimiento, y hoy reconoce esa falla. Al promover el gasto público para reactivar la economía, tal como se advirtió, no se logra el efecto esperando, y el Ejecutivo al insistir en esta política deterioró aun más las finanzas públicas, aumentando la deuda. Peor aún, su alza tributaria tuvo un efecto indudable en el menor impulso económico. No se debe olvidar que gran parte del tropiezo económico vivido en este periodo fue producto de causas internas, de las reformas que el Gobierno ha impulsado que han dejado estragos en todos los sectores productivos.

A mayor abundamiento, el nivel de Deuda Bruta del Gobierno Central, que durante el actual Gobierno ha sido duplicada, pues aumentó desde un 12,7% el 2013, a casi 25% del PIB (proyectada a 2017), sumado al debilitamiento que sufrió la Regla Fiscal, llevó a la baja en la clasificación de riesgo del país.

Aunque el Gobierno señale que se disminuirá el nivel de endeudamiento de Chile, esto no se condice con la mantención del déficit que se proyecta para los próximos años. De hecho, aun no se

explicita cuál será el déficit para el 2017. La reducción anunciada no es tal, de hecho ésta seguirá creciendo, sólo que a un ritmo menor.

Lo anterior merece tomar con responsabilidad el año presupuestario 2018, destrabando la inversión y productividad. Para ello, la componente del gasto es esencial. Contener la expansión del gasto, es clave, cosa que el Gobierno decide no hacer al incrementar el presupuesto en 3.9%. No es posible sostener por tanto, que se ha actuado de manera austera y responsable ■■■

CONTENIDO DEL **PROYECTO DE LEY**

Artículo 1º.- Se aprueba el cálculo de ingresos y gastos para el sector público, en los siguientes términos:

A.- En Moneda Nacional

En Miles de \$			
	Resumen de los Presupuestos de las Partidas	Deducciones de Transferencias	Total
INGRESOS	50.826.522.455	2.405.670.859	48.420.851.596
IMPUESTOS	34.758.236.115		34.758.236.115
IMPOSICIONES PREVISIONALES	2.751.136.329		2.751.136.329
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.482.067.612	1.413.589.673	68.477.939
RENTAS DE LA PROPIEDAD	481.466.941	49.454.554	432.012.387
INGRESOS DE OPERACIÓN	958.072.610		958.072.610
OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.060.506.080		1.060.506.080
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27.052.796		27.052.796
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.276.538.350		3.276.538.350
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	451.321.093		451.321.093
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	976.598.371	942.626.632	33.971.739
ENDEUDAMIENTO	4.574.576.445		4.574.576.445
SALDO INICIAL DE CAJA	28.949.713		28.949.713
GASTOS	50.826.522.455	2.405.670.859	48.420.851.596
GASTOS EN PERSONAL	8.399.257.773		8.399.257.773
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.144.862.809		3.144.862.809
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7.547.680.399		7.547.680.399
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.700.695.137	1.314.254.772	17.386.440.365
INTEGROS AL FISCO	178.006.294	148.789.455	29.216.839
OTROS GASTOS CORRIENTES	14.619.904		14.619.904
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	224.188.544		224.188.544
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.356.515.340		1.356.515.340
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.553.484.916		3.553.484.916
PRÉSTAMOS	940.566.643		940.566.643
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.226.636.367	942.626.632	3.284.009.735
SERVICIO DE LA DEUDA	2.511.346.039		2.511.346.039
SALDO FINAL DE CAJA	28.662.290		28.662.290

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:

En Miles de US\$

	Resumen de los Presupuestos de las Partidas	Deducciones de transferencias	Total
INGRESOS	3.678.449		3.678.449
IMPUESTOS	32.400		32.400
RENTAS DE LA PROPIEDAD	894.396		894.396
INGRESOS DE OPERACIÓN	4.569		4.569
OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.562		22.562
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160		160
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.544.176		2.544.176
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	3.220		3.220
ENDEUDAMIENTO	174.966		174.966
SALDO INICIAL DE CAJA	2.000		2.000
GASTOS	3.678.449		3.678.449
GASTOS EN PERSONAL	162.460		162.460
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	226.870		226.870
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	455		455
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.986		72.986
OTROS GASTOS CORRIENTES	310		310
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39.434		39.434
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.838.321		2.838.321
INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.857		1.857
PRÉSTAMOS	3.220		3.220
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300		300
SERVICIO DE LA DEUDA	330.236		330.236
SALDO FINAL DE CAJA	2.000		2.000

Artículo 2.- Apruébanse los Ingresos Generales de la Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 2018, a las Partidas que se indican:

	Miles de \$	Miles de US\$
INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN:		
IMPUESTOS	34.758.236.115	32.400
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.001.650	1.301.548
RENTAS DE LA PROPIEDAD	243.625.664	894.396
INGRESOS DE OPERACIÓN	15.916.893	4.569
OTROS INGRESOS CORRIENTES	443.078.199	10.292
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	325.077	
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.722.230.525	2.542.755
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	495.120.289	561.901
ENDEUDAMIENTO	4.550.000.000	174.966
SALDO INICIAL DE CAJA	5.000.000	2.000
TOTAL INGRESOS	43.346.534.422	5.524.827

	Miles de \$	Miles de US\$
APORTE FISCAL:		
Presidencia de la República	20.016.052	
Congreso Nacional	121.684.702	
Poder Judicial	555.581.162	
Contraloría General de la República	73.950.143	
Ministerio del Interior y Seguridad Pública	2.721.693.514	79.918
Ministerio de Relaciones Exteriores	82.216.493	206.341
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	424.261.453	
Ministerio de Hacienda	407.752.807	
Ministerio de Educación	9.988.507.627	
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	1.033.659.663	
Ministerio de Defensa Nacional	1.161.701.366	188.258
Ministerio de Obras Públicas	1.955.815.892	
Ministerio de Agricultura	451.304.703	
Ministerio de Bienes Nacionales	11.798.437	
Ministerio del Trabajo y Previsión Social	6.455.193.349	

Ministerio de Salud	5.263.943.470	
Ministerio de Minería	45.864.007	
Ministerio de Vivienda y Urbanismo	2.485.172.660	
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	996.448.533	
Ministerio Secretaría General de Gobierno	28.599.233	
Ministerio de Desarrollo Social	610.218.659	
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República	12.842.850	
Ministerio Público	189.870.848	
Ministerio de Energía	130.547.647	
Ministerio del Medio Ambiente	53.686.745	
Ministerio del Deporte	97.396.380	
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género	52.482.498	
Servicio Electoral	23.791.675	

	Miles de \$	Miles de US\$
Programas Especiales del Tesoro Público:		
Subsidios	1.119.234.538	
Operaciones Complementarias	3.921.947.384	2.710.381
Servicio de la Deuda Pública	2.350.892.371	329.939
Fondo de Reserva de Pensiones		810.554
Fondo de Estabilización Económica y Social		173.959
Fondo para la Educación	30	1.025.477
Fondo de Apoyo Regional	392.520.299	
Fondo para Diagnósticos y Tratamiento de Alto Costo	105.937.232	
TOTAL APORTES	43.346.534.422	5.524.827

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

La discusión y tramitación de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, se enmarca en un año de elecciones, donde el presupuesto será ejecutado por una nueva Administración. De esta forma, existen aspectos particulares que deben ser tomados en consideración.

El primero de ellos, obedece a las estimaciones de ingreso, a partir de las cuales el Gobierno ha anunciado que el gasto fiscal para el próximo año crecerá en 3,9% real anual, valor muy por sobre lo esperado. Esto en atención a que si bien el Ejecutivo habla de un escenario de franca recuperación, lo cierto es que la tasa de crecimiento del PIB promediará 1,8% en estos últimos cuatro años, junto con una inversión que acumula cuatro años de variación negativa (con una proyección de -1,6% anual para el 2017). Además, la tasa de crecimiento del PIB tendencial que calcula el Comité de Expertos ha sido corregida sistemáticamente a la baja, desde 4,7% estimada el año 2011 a un valor de 2,6% el 2017.

En las cuentas fiscales, la deuda bruta del Gobierno Central crece aceleradamente, estimándose que este año alcanzará un 25% del PIB. Más grave aún es que se están asumiendo gastos importantes a futuro respecto de los cuales no hay seguridad que se puedan financiar, por lo que se observa un cuadro fiscal altamente complejo, que será traspasado al próximo gobierno.

El Proyecto de Ley que se somete a discusión, utiliza como supuestos los parámetros centrales que se indican a continuación, donde se mantuvo la proyección de crecimiento del PIB para el 2017 publicada en julio de este año (1,5%), estimándose una tasa de crecimiento anual del producto de 3% para el 2018. El precio del cobre, por su parte, fue corregido al alza a 288 centavos de dólar la libra. El tipo de cambio, en tanto, no sufrió correcciones significativas.

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 2017-2018

	2017	2018
PIB (Var. Anual, %)	1,5	3,0
Tipo de cambio (\$/US\$, promedio, valor nominal)	652	650
Precio del cobre (US\$/lb, promedio, BML)	271	288
PIB Tendencia (Var. anual, %)	3,0	2,6
Cobre Referencia (US\$/lb)	256	277

Fuente: Dipres.

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ESTRUCTURALES

Para determinar el gasto fiscal, se debe comenzar por estimar los ingresos. Luego se realiza el ajuste cíclico correspondiente (utilizando los parámetros de largo plazo) y se obtiene como resultado el nivel de gasto estimado compatible con la Regla Fiscal. Para 2018, la DIPRES cifró la tasa de crecimiento de los ingresos totales en 7,4% real. Los ingresos estructurales, en tanto, estimó que crecerían un 5,0% real. Estas cifras han sido criticadas, pues surgen varias dudas respecto del cálculo de los ingresos, los que parecieran estar sobreestimados.

En términos generales, se consideró un mayor dinamismo de la actividad económica (3,0%), que se espera impulse la recaudación. Ello no debiera influir mayormente en el dinamismo de los ingresos estructurales puesto que depende del PIB potencial.

Cabe mencionar en todo caso que, sistemáticamente, se han sobreestimado las tasas de crecimiento del PIB esperadas en las distintas elaboraciones de la Ley de Presupuestos. Es así como el 2015 se estimó una expansión del PIB de 3,6% real, pero el crecimiento efectivo fue tan solo de 2,3%. Para este año, en tanto, se proyectó en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) 2017 (publicado en octubre de 2016) una tasa de crecimiento de 2,25%, pero ahora sabemos que no alcanzará más de 1,5%.

En dicho contexto, los ingresos proyectados para el 2018 ameritan mayor análisis, por cuanto suponen una expansión muy superior al crecimiento previsto ya sea en el PIB potencial o efectivo. Parece bastante claro que las estimaciones apostaron a un importante aporte derivado de la última etapa de la reforma tributaria, existiendo legítimas dudas de que se haya ajustado la información a la realidad “post

PROYECCIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

(MILLONES DE PESOS 2018)

	IFP 2017	IFP 2018	VARIACIÓN
1. Impuesto a la Renta	12.645.521	14.437.065	14,2%
Minería Privada	647.009	1.169.657	80,8%
Resto Contribuyentes	11.998.513	13.267.407	10,6%
2. IVA	15.327.407	16.400.732	7,0%
3. Impuestos Productos Específicos	2.818.842	2.853.774	1,2%
4. Impuestos Actos Jurídicos	556.673	573.958	3,1%
5. Impuestos al Comercop Exterior	362.692	354.307	-2,3%
6. Otros	63.650	138.373	317,4%
Ingresos Netos por Impuestos	31.647.484	34.758.236	9,8%

Fuente: Dipres.

reformas a la reforma”, que darían por resultado ingresos menores a los originalmente esperados.

De acuerdo a los datos entregados por la propia DIPRES en el Informe de Finanzas Públicas (IFP), presentado en el comienzo de la tramitación de la ley, se explica que el menor ingreso tributario del resto de los contribuyentes en el año anterior “se vio compensado por los ingresos percibidos por concepto del impuesto sobre el FUT histórico, que son tratados en su totalidad como ingresos estructurales”. Sin embargo, es del todo inapropiado que se cataloguen estos ingresos como estructurales, puesto que se recibieron sólo por una vez e, incluso más, significarán una merma de ingresos tributarios futuros dado que los retiros de utilidades quedarán exentos de Impuesto Global Complementario (por haber sido parcialmente adelantado su pago). Por otra parte, los ingresos proyectados provenientes del IVA se estimó crecerían 7% en relación con el IFP del 2017 (5,4% respecto de la actualización). Sin embargo, este incremento resulta desproporcionado si se compara con la evolución de la demanda interna, la cual aumentaría de acuerdo a las estimaciones en sólo 4,1% anual el 2018.

En materia de gastos también hay dudas, pero en la dirección contraria; es decir, que éstos pudieran estar subestimados para el período 2019-2021. Particularmente preocupante es que no se estén incorporando todos los gastos comprometidos, lo que explicaría el cambio radical entre la anterior actualización del IFP y la reciente publicación, que pasa de holguras negativas de 0,6% del PIB para los próximos 2 años a holguras positivas de 0,6% del PIB hacia el año 2021.

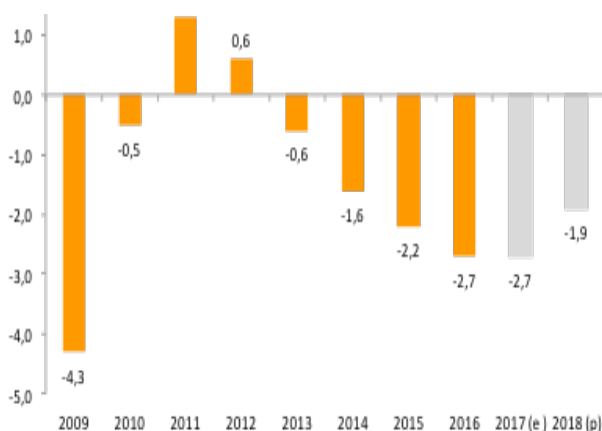
NUEVO ESCENARIO FISCAL

Aún con la evidente sobreestimación de los ingresos de proyección de la DIPRES, tanto el Balance Efectivo como el Balance Cíclicamente Ajustado revelan un déficit mayor al que se heredó de la administración anterior.

El Balance Efectivo alcanzaría un nivel de -2,7% del PIB el 2017, bajando a -1,9% del PIB el 2018, es decir, 1,3 puntos más deficitario que el año 2013 (Gráfico N° 1).

Gráfico N° 1 BALANCE EFECTIVO

(% del PIB).



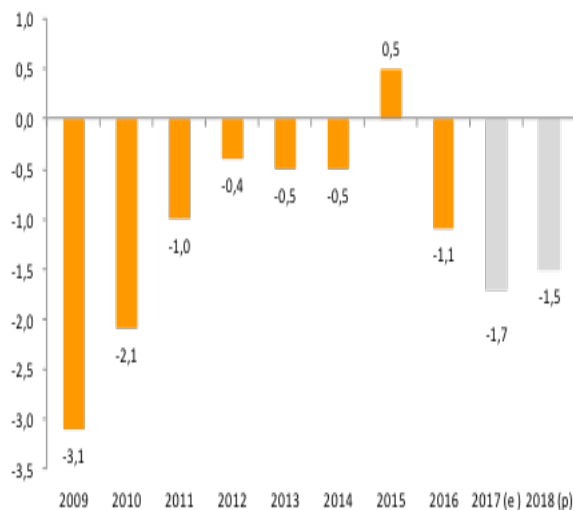
Fuente: Dipres.

El Balance Cíclicamente Ajustado, por su parte, habrá pasado de un nivel de -0,5% el 2013 a -1,5% el 2018. Con ello se habrá cumplido con la Regla del Balance Cíclicamente Ajustado autoimpuesta por el ex Ministro Valdés (que supone una reducción de 25 puntos porcentuales respecto del déficit del año anterior, con parámetros corregidos), pero significa un deterioro evidente de las finanzas públicas (Gráfico N°2). Cabe recordar que la Regla anunciada originalmente por la actual administración suponía una convergencia a la meta estructural de 0% del PIB al año 2018, lo que se ha alejado progresivamente.

Dicho lo anterior, el Presupuesto 2018 ha sorprendido con un anuncio de incremento del Gasto de 3,9% real anual. Esto, amparado principalmente en una “franca recuperación” que aún no se consolida. Con todo, para el 2018 se espera, al igual que en los años anteriores, un nuevo déficit de las cuentas fiscales, lo que continuará elevando la deuda pública. La tarea por delante no es fácil. Se están comprometiendo muchos recursos fiscales sin claridad de cómo se van a financiar. Además, las prioridades en el gasto parecieran no estar alineadas con lo que espera la ciudadanía ■■■

Gráfico N° 2 BALANCE CÍCLICAMENTE AJUSTADO

(% del PIB)



Fuente: Dipres.

V. COMENTARIOS DE MÉRITO ESPECÍFICO

Junto con el articulado, el Proyecto de Ley contiene el detalle de la asignación de recursos para las 29 Partidas Presupuestarias, que corresponde al nivel superior de agrupación asignada a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, Ministerio Público, a cada uno de los diversos Ministerios y a la Partida “Tesoro Público” que contiene la estimación de ingresos del Fisco y de los gastos y aportes de cargo fiscal.

Al revisar las Partidas Presupuestarias, se han identificado una serie de temas respecto de la propuesta del Ejecutivo, los que se detallan a continuación:

1. Gastos burocráticos e incremento de los gastos en personal

El Informe de Finanzas Públicas, que acompaña la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos detalla en su capítulo sobre “Transparencia fiscal y presupuestaria”

el incremento de ciertos gastos burocráticos a nivel global.

Se consiga un aumento de la dotación de personal en 13.374 funcionarios para el 2018, lo que equivale a un 5,6% más que el 2017. Parte del incremento, se explica, de acuerdo a los datos del Gobierno, por el programa de traspaso de honorarios a contrata que se está implementando por parte del Ejecutivo y además, por un incremento en el personal relacionado con nuevos Jardines Infantiles, que asciende a 2.544 personas.

Para analizar lo anterior, cabe recordar que esta Administración, puso en marcha a partir del 2015 un plan de traspaso de 14.000 personas que prestan servicios a honorarios a la contrata. Para ello, a contar del 2016 se estableció en la Ley de Presupuestos, un número máximo de personas que pueden ser contratadas a honorarios en cada uno de los Servicios. Para efectuar los traspasos, los Servicios deben modificar límite máximo de la dotación de personal fijada en glosas, con una correspondiente reducción en el número de personas contratadas a honorarios. En particular

DOTACIÓN MÁXIMA DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO

	2013	2014	2015	2016	2017	2018p
Dotación Máxima	198.009	202.856	212.685	221.659	237.290	250.664
Variación respecto año anterior		2,4%	4,8%	4,2%	7,15%	5,6%

1. A contar del año 2012 los Presupuestos de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones fueron traspasados al Ministerio del Interior y Seguridad Pública

2. No incluye personal del Ministerio de Salud afecto a las Leyes N° 19.664 y N° 15.076

3. En relación al IFP del año 2016, se actualiza la cifra del año 2017.

p: Proyecto de Ley de Presupuestos 2018

Fuente: Dipres.

para el 2017, la Ley de Presupuestos contempló expresamente 8000 cupos para el presente año.

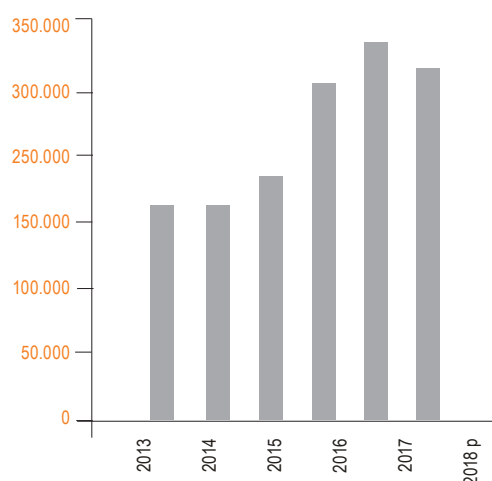
Pese a ello, cuando se suma el traspaso antes señalado, en el entendido que todos los cupos hayan sido transferidos, más el personal de Jardines Infantiles, el incremento en personal es mayor, dejando de manifiesto que el Ejecutivo no tiene dentro de sus prioridades la disminución de este tipo de gastos. Lo anterior coincide la trayectoria del gasto en personal del actual Gobierno.

Aunque para el 2018 se disminuyan los recursos destinados a contratar personal a honorarios en 17,8%, dicha reducción no debe mirarse aisladamente. Esta Administración, en los años previos incluso llevando a cabo el plan de traspaso de honorarios detallado previamente, cuyo fin es disminuir este tipo de contrataciones, presenta a partir del 2014 aumentos en este ítem. A lo anterior, debe agregarse que no se conoce el estado actual de los traspasos del presente año, y el Ejecutivo insiste para el 2018 en considerar nuevamente a través del Artículo 24 del Proyecto de Ley de Presupuestos, 8000 nuevos cupos para ser traspasados.

Gráfico N° 3

GASTO AUTORIZADO MÁXIMO EN HONORARIOS

(Millones de pesos de 2018)



1. En relación al IFP del año 2016, se actualiza la cifra del año 2017.
p: Proyecto de Ley de Presupuestos 2018

Fuente: Dipres.

TRASPASO DE HONORARIOS A LA CONTRATA 2015-2017

Año	Cantidad	Estado
2015	2.235	Traspasados
2016	3.772	Traspasados
2017	8.000	Cupos asignados a los Servicios, traspasos a realizarse durante el segundo semestre
Total	14.007	

Fuente: DIPRES, Agosto 2017, única información disponible

Se suma a lo anterior, el incremento en los gastos en viáticos en un 6,8%, pese a las normas de austeridad en cuanto a que las comisiones de servicio en el país y en el extranjero deberán reducirse a las que sean imprescindibles para el cumplimiento de las tareas institucionales, especialmente aquellas en el extranjero.

GASTO AUTORIZADO MÁXIMO EN VIÁTICOS NACIONALES

	2013	2014	2015	2016	2017	2018p
Viáticos Totales (millones de pesos 2018)	64.362	64.776	73.025	83.161	84.306	93.259
Variación % respecto año anterior		0,6%	12,7%	13,9%	1,4%	10,6%
Viáticos administración Civil (millones de pesos 2018)	49.632	50.364	57.567	63.359	64.840	69.248
Variación % respecto año anterior		1,5%	14,3%	10,1%	2,3%	6,8%

1. En relación al IFP del año 2016, se actualiza la cifra del año 2017.

p: Proyecto de Ley de Presupuestos 2018

Fuente: Dipres.

2. Reactivación de la Empresa Pública SACOR

Al analizar el Presupuesto de CORFO para el 2018, consta un aumento significativo del Subtítulo de “Adquisición de Activos Financieros”, que asciende al 50,0%. Al efecto, se trata de una transferencia que efectuará la CORFO a la Empresa Pública SACOR SpA, por 260 millones de dólares aproximadamente.

Sin embargo, la Sociedad Agrícola Sacor SpA. (cuyo único accionista es CORFO), desarrolló hasta el año 2004 iniciativas para impulsar las actividades agropecuarias, no presentando movimiento desde aquella época, razón por la cual, en el año 2012, el Comité Sistema de Empresas Públicas (SEP) recomendó disolver anticipadamente y liquidar SACOR SpA, atendido que a pesar de haber desarrollado múltiples actividades comerciales dentro de su giro de fomento agropecuario, desde el año 2004 hasta a la fecha, no se encontraba en operaciones.

Cabe recordar fue creada por CORFO en el año 1964, para la explotación y administración de predios rústicos de cualquier clase y la prestación de cualquier servicio de fomento agropecuario. Respecto de su estructura de propiedad, el único accionista es CORFO.

De esta forma, en Sesión N°445, del 28 de septiembre de 2012, el Consejo de la CORFO, adoptó el Acuerdo N° 2.750, por el cual aprobó la disolución y liquidación de dicha empresa, facultando a su Vicepresidente Ejecutivo para designar a los tres integrantes de la Comisión liquidadora. Así las cosas, escritura pública de fecha 11 de marzo de 2013, ante la Notario de Santiago doña Nancy de la Fuente, se aprobó la disolución y liquidación de la sociedad.

Tres años más tarde, el 2015, y de acuerdo a datos que proporciona la propia CORFO en una resolución afecta al trámite de toma de razón, publicada por la SVS, se señala que estando pendiente gestiones para dar término a la liquidación de SACOR SpA, y como tampoco

se ha efectuado el término de giro ante el SII, se estima que la personalidad jurídica está aún vigente, por lo que Consejo Directivo del Comité SEP acordó recomendar al Consejo de CORFO dejar sin efecto el término anticipado y liquidación de la empresa, atendido el interés público involucrado y que reinicie un desarrollo normal de actividades.

Para tales efectos, el 21 de enero de 2016, a través de la comunicación de un hecho esencial a la SVS, la Presidenta de la Comisión Liquidadora de SACOR SpA, señala que en sesión de 15 de enero de 2016, la Comisión Liquidadora de la Sociedad, tomó conocimiento de la decisión del único accionista CORFO, de dejar sin efecto el proceso de liquidación y reiniciar el desarrollo normal de las actividades de su giro, razón por la cual solicitó suspender sus cometidos a contar de dicha fecha.

Dicho lo anterior, corresponde señalar que en el presente ejercicio presupuestario, se contemplan gastos de CORFO como transferencia a la empresa por \$4.500 millones, y para el 2018 se contempla expresamente una capitalización por más de \$168.000 millones vía glosa, con el objeto que ésta ejecute programas de cobertura de riesgos y respalde las coberturas que se encuentran comprometidas por CORFO con los Fondos de Cobertura de Riesgos.

Sociedad Agrícola SACOR SpA.

en Miles de \$ de 2018

Ley de Presupuestos 2017 Aprobada	0
Presupuesto Vigente Agosto 2017	4.564.571
Presupuesto Ejecutado Agosto 2017	513.000
Proyecto de Ley de Presupuestos 2018	168.264.000

Lo que se busca es reactivar una empresa pública, cuya disolución fue acordada hace más de cinco años, y que no presenta movimiento desde hace más de trece. Bajo la figura de la existencia de la personalidad jurídica se busca que se administren fondos de la CORFO, bajo el argumento del interés público involucrado en esta empresa, lo que merece reparos, pues cabe recordar que el inciso segundo del numeral 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República establece que “El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado”.

El giro de Sacor, corresponde a la explotación y administración de predios rústicos de cualquier clase y la prestación de cualquier servicio de fomento agropecuario. Lo que hace la Glosa propuesta es ampliar el giro de la empresa, eminentemente agrícola, para hacerse cargo de una situación particular que tiene CORFO en relación al sistema de garantías estatales.

La Administración anterior, trabajó desde el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio de Economía y CORFO, en un Proyecto de Ley con el objetivo de consolidar el sistema de garantías estatales en CORFO. Este Gobierno, solicitó un informe al Banco Mundial, quien le recomendó que una entidad administrara este sistema, a lo que CORFO resolvió con la reactivación de la empresa en comento con dicho fin.

Si bien se reconoce la necesidad de hacerse cargo de la administración los actuales

programas de garantías de Corfo, prácticamente todos orientados a afianzar créditos para que las pymes puedan acceder al financiamiento, en efecto, no procede hacerlo por esta vía, pues para tales efectos, corresponde que se tramite una ley especial, con quorum calificado, de acuerdo a la Constitución, y no a través de una glosa presupuestaria.

Se critica la forma de proceder de la actual Administración, pues además de dejar sin efecto un acuerdo adoptado por parte del Sistema de Empresas Públicas, parece poco prudente todo el peso y gasto que su nueva puesta en marcha conlleva, y además, que los aportes de capital no son considerados como gasto público.

3. Incumplimiento de recursos comprometidos en Ley de Inclusión

La Ley N° 20.845 “de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado”, dispuso un Aporte por Gratuidad que se entrega a los establecimientos gratuitos, que estén suscritos a la Subvención Escolar Preferencial y que estén constituidos como persona jurídica sin fines de lucro, cuyo fin fue compensar la caída en los ingresos de los establecimientos que renuncian al financiamiento compartido, esto es, al aporte que hacían los padres.

Dicha Ley estableció que el Aporte por Gratuidad se entregaría de forma gradual hasta llegar al régimen en 2018, de manera que el primer año (2016) esta ascendería a USE (unidad de subvención educacional) 0,25 mensuales, el segundo año (2017) a USE 0,35 y en 2018 lo que

corresponde es que esta crezca a USE 0,45. La USE equivale a \$ 23.980, de manera que el Aporte por Gratuidad a entregarse en 2018 equivaldría a \$ 10.791 por alumno.

Sin embargo, el Gobierno en la Ley de Presupuestos para el 2018 propone disminuir los recursos, modificando las condiciones que se establecieron al momento de aprobarse la ley de inclusión, congelando el aporte para 2018, en la misma suma que se contempló el 2017, esto es 0,35 unidades de subvención educacional durante el año 2018, lo que supone la entrega de menos recursos por cada alumno, evadiendo el compromiso legal asumido por el Gobierno.

La reducción equivale a \$80.000 millones que por ley le corresponde recibir a los establecimientos que cumplen con las condiciones en las que este gobierno ha insistido, presentándose eventuales vicios de constitucionalidad por afectación de derechos adquiridos. De agregarse este monto, el gasto fiscal 2018 pasaría de incrementarse en 3,9 a 4,08% real.

4. Incremento de recursos para gratuidad de Educación Superior al 60%

Uno de los principales ejes del Presupuesto 2018 que presentó el Gobierno, es el aumento en cobertura de la política de gratuidad al sexto decil de ingreso.

El presupuesto para gratuidad aumenta para el 2018 en \$225.625 millones, lo que equivale a un incremento real de casi 30%. Al efecto, utilizando el supuesto realizado por el gobierno de que los beneficiarios de esta política el 2018 serán aproximadamente 380.000 estudiantes,

Subt.	Item	Asig.	Descripción	Presupuesto 2018	Variación Real Presupuesto (\$ 2018)	Variación Real Presupuesto (%)
24	03	198	Financiamiento del acceso gratuito a las Universidades 2017	680.992.458.000	148.504327.746	27,9%
24	03	199	Financiamiento del acceso gratuito a Institutos Profesionales y Centros de	311.980.662.000	71.121.212.004	32%

el presupuesto por beneficiario alcanzaría \$2.613.087 el próximo año. Esta ampliación implica invertir más en los estudiantes con mejor nivel socioeconómico, porque participan proporcionalmente más de la Educación Superior y los programas a los que éstos acceden son más caros.

Comparativamente, este monto es un 50% superior a lo que recibe un niño que asiste a una sala cuna vía transferencia de la JUNJI (\$1.893.672) y más del doble de lo que recibe un niño entre 2 y 3 años que asiste a un jardín infantil vía transferencia de fondos de la JUNJI (\$1.225.764).

La extensión de la gratuidad universitaria se realiza a costa de los colegios municipales y particulares subvencionados, quienes ven reducida la subvención esperada para el 2018

5. Incumplimiento del plan de inversiones en Salud: construcción de hospitales

En el discurso de presentación de la Ley de Presupuestos, la Presidenta señaló expresamente que dejará 20 hospitales construidos, 29 en construcción y 18 en diseño, lo cual se presta para confusiones respecto al

cumplimiento del compromiso inicial de 2014 del millonario plan de inversiones 2014 – 2018, en donde se prometía para marzo de 2018 una inversión total de US\$4.000 millones en 4 años y así contar con 20 hospitales construidos, 20 “en construcción” y 20 “en estudio o licitación”.

Sin embargo, de los 20 hospitales que inicialmente se prometió dejar terminados en marzo de 2018, sólo quedarán construidos 9, los que equivalen a 308 camas de las 2.390 comprometidas (sólo 13% del total). Al efecto, el Gobierno al inicio del periodo comprometió que 2.390 nuevas camas hospitalarias entrarían al sistema público, sin embargo sólo se cumplirá con 700 camas, lo que sin duda demuestra una baja capacidad de gestión.

Si bien este año se aumentan los recursos para inversión de hospitales, la tendencia es que el Ministerio es incapaz de ejecutar esos recursos, por lo que a fin de año suelen ser subejecutados, no siendo posible invertirlos en nueva infraestructura sanitaria. El presupuesto que se destina a iniciativas de inversión en salud (subtítulo 31), muestra un incremento de \$85.062 millones con respecto al presupuesto del año 2017 (expresado en \$ 2018), lo que equivale a un incremento de 23,7% real.

El ambicioso plan original 20-20-20 que propuso el Gobierno, será una promesa incumplida,

dejando a los enfermos sin la atención necesaria, por lo que se requiere conocer una comparación a base del número de camas y no de hospitales que a marzo de 2018 se añadirán a la red pública de atención en salud, y la comparación de este resultado con el plan inicial comprometido por el Gobierno en septiembre de 2014.

6. Aumento de la deuda hospitalaria

Este es un tema que se arrastra de forma creciente desde el año 2015. Dicho año ésta alcanzó un monto final de \$131.476 millones, explicada prácticamente su totalidad por la deuda en bienes y servicios de consumo (subtítulo 22). Durante ese año, el Ministerio de Hacienda tuvo que realizar un aporte extraordinario de \$282.356 millones, el que de no existir, hubiese significado una deuda de \$408.786 millones (prácticamente el triple).

En 2016, la deuda volvió a alcanzar un nuevo récord: \$191 mil millones, donde también hubo aportes extraordinarios de Hacienda, esta vez de casi \$250 mil millones.

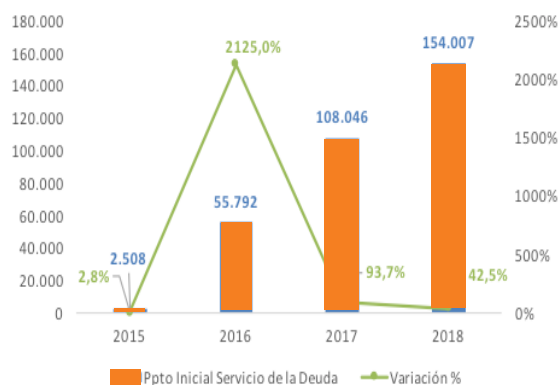
Durante 2017 la deuda no ha cedido, más bien sigue creciendo. En abril alcanzaba los \$231.466 millones de pesos. La última cifra disponible al 30 de julio de 2017) da cuenta de un monto por pagar por parte de los Servicios de Salud de \$258.698 millones.

El Presupuesto 2017 (en ejecución) tiene un presupuesto actualizado para el Servicio de la Deuda de \$214.025 millones (el inicial era de \$105.308 en \$ 2017), y el Presupuesto 2018 provisionó sólo \$154 mil millones para este fin.

Gráfico N° 4

MINSAL: PRESUPUESTO INICIAL SERVICIO DE LA DEUDA

(MM \$ 2018 y %)



Fuente: LyD en base a DIPRES.

Se desconocen estimaciones reales sobre el monto al que llegará la deuda hospitalaria, si se estiman nuevos o se transparente los aportes realizados por el Ministerio de Hacienda durante el año y estrategias para palear déficit, además de sincerar la situación financiera que se heredará a la próxima administración.

7. Disminución de Recursos para el combate de la delincuencia

La Subsecretaría de Seguridad Pública es la encargada principalmente de ejecutar las políticas públicas en materia de seguridad. Sin embargo, su presupuesto decrece en un 18,3%, mientras que los gastos en personal aumentan en un 33%.

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AÑO 2017 LEY DE PRESUPUESTOS (APROBADA POR EL CONGRESO NACIONAL) (EN \$ DE 2017)	AÑO 2017 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (EN \$ DE 2017)	AÑO 2017 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (EN \$ DE 2017)	AÑO 2017 LEY DE PRESUPUESTOS (INICIAL+REAL+ LEYES ESPECIALES) (EN \$ DE 2018)	AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (EN \$ DE 2018)	VARIACIÓN % (6)/(5)
Programas de Prevención en Seguridad Ciudadana	11.622.608	11.625.210	8.791.756	11.927.465	11.079.213	-7,1%
Programa de Gestión en Seguridad Ciudadana	4.017.368	4.017.716	215.394	4.122.177	4.065.608	-1,4%
Plan Comunal Seguridad Pública	13.468.518	13.370.651	7.760.777	13.820.888	5.418.733	-60,8%

El Programa de Prevención en Seguridad Ciudadana, Programa de Gestión en Seguridad Ciudadana y el Plan Comunal Seguridad Pública bajan en la asignación de recursos. Particularmente, respecto del Plan Comunal Seguridad Pública, si bien su disminución de recursos estaría fundada en la mala evaluación del programa, cabe hacer presente que esta fue una iniciativa del Gobierno, donde el 2018 debían ingresar una serie de nuevas comunas, todo lo cual queda en suspenso producto de la rebaja de recursos, quedando esta materia relegada a las nuevas autoridades.

Respecto del presupuesto del Plan Comunal Seguridad Pública, cabe destacar además, que al menos \$3.078 millones se destinan en particular a la implementación del Plan en las comunas de la Región de la Araucanía, para financiar iniciativas que contribuyan a la reposición de las actividades económicas que resulten afectadas por eventos de violencia rural, las que deberán canalizarse por medio de instituciones privadas o públicas.

Además, el presupuesto total de los Centros Regionales de Atención y Orientación a las víctimas disminuye en un 28,2%, por lo que se deduce una posible merma en la atención de personas, puesto que en las áreas que se rebajan gastos están directamente relacionadas con el fin del programa.

8. Continúa la brecha de recursos para la atención de niños del SENAME

El presupuesto 2018 para el Servicio Nacional de Menores (SENAME) considera un gasto de \$319.410 millones de pesos, es decir, \$27.254 millones más que en el presupuesto anterior, lo que equivale a un incremento de 9,3%.

Cabe recordar que en el área de protección del SENAME, se encuentran los programas que son administrados directamente por el Servicio y los gestionados por los organismos colaboradores (sociedad civil), donde se encuentran los centros residenciales, oficinas de protección

de derechos, diagnóstico y programas de intervención ambulatoria.

- Programas residenciales de los organismos colaboradores à Tienen el 91% de las plazas (7.774 de las 8.524 plazas) reciben solo el 54% del presupuesto (\$173.209 de \$319.410 millones). La Unidad de Subvención Sename (USS) tiene un valor para 2017 de \$15.480.
- El Presupuesto 2018 considera un aumento en el monto de la subvención para el cuidado residencial entregado a los organismos colaboradores, llegando al límite máximo a transferir establecido en la Ley N° 20.032 de subvenciones, con lo que pasó de 12,1 USS a 15 USS, es decir, de \$187.308 a \$232.200 (\$44.892 más).
- Sin embargo, todavía existe una inmensa brecha frente al aporte mensual que recibe un centro de administración directa (SENAME), pues aquellos reciben mensualmente \$1.391.470 por niño, en promedio.

9. Deuda en casos de atención derivados de Justicia Juvenil

El artículo 80 bis de la ley 19.968 permite a los Tribunales de Familia derivar menores con el fin de adoptar medidas cautelares, a niños, niñas o adolescentes en casos urgentes, obligando a las instituciones a prestar el servicio de manera inmediata, aun cuando no exista oferta programática o plazas disponibles para la intervención requerida. El financiamiento del 80 bis se efectúa con meses y a veces años de retraso, lo que implica a las propias instituciones colaboradoras tengan que financiar las atenciones impuestas por esta norma. A fines de 2016, la deuda con las instituciones

colaboradoras por la aplicación del 80 bis ascendía a \$8.700 millones.

A pesar de que el Presupuesto 2017 consideraba \$12.397 millones para el pago de las órdenes de tribunales de familia, el Presupuesto 2018 considera en su Glosa 05 b) \$20.350 millones para ello, con lo que se estarían asignando más de \$8.000 millones para el pago de esta deuda.

Si bien se trata de mayores recursos, en la práctica lo que se hará es pagar deuda y no necesariamente un incremento en las atenciones.

10. Recorte de recursos en Consejo Nacional de la Infancia

El Consejo es “una instancia asesora presidencial que integra los esfuerzos de diversos organismos públicos, coordinando y dirigiendo sus acciones hacia el diseño y establecimiento de un sistema integral de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia, donde el Estado cumpla el rol de garante. Esta asesoría consiste en la identificación, formulación y ejecución de políticas, planes, programas, medidas y actividades relativas a respetar, promover y proteger el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, regional y local”.

Fue creado por este Gobierno, y su objetivo es promover una agenda ideológica del Gobierno, con nulo impacto en infancia y Sename. Dado que el presente Gobierno termina en Marzo, la Ley de Presupuestos reduce los recursos prácticamente a 1/3, lo suficiente para pagar los sueldos hasta esa fecha (de \$3.264.550 mil a 1.118.977 mil de, un 66% menos).

Otro tema, es que se constata en el Presupuesto vigente una transferencia de M \$400.000 desde el Consejo Nacional de la Infancia que se transfieren a Organismos Internacionales, en este caso, el PNUD (subtítulo 24, ítem 07, asignación 001). Dado el momento de sensibilización con la temática de infancia con posterioridad a la crisis del SENAME, resulta particularmente pertinente transparentar su objetivo.

En la página del PNUD el único proyecto relevante en materia de infancia publicado dice relación con la iniciativa “Yo Opino, es mi derecho”, método para involucrar a niños, niñas y adolescentes en la discusión en torno a cómo lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y mejorar el planeta.

11. Recursos del Transantiago aumentan en 125% en los últimos 5 años

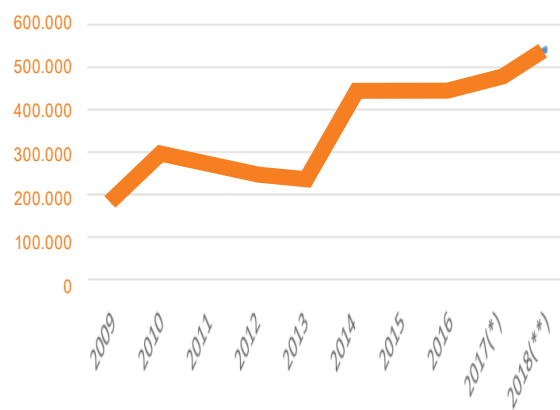
Los recursos de Transantiago se encuentran en el Programa 06 “Subsidio Nacional al Transporte Público” del Presupuesto del Ministerio de Transporte, los que si bien no presentan a nivel global un gran incremento, sí llama la atención el aumento en un 115% de la asignación “Subsidio Especial Adicional – Transantiago”.

Lo anterior surge producto de la última modificación que sufrió la Ley N° 20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros, que el 2015 a través de la Ley N° 20.877, modificó el subsidio incrementando los recursos y en especial en su artículo tercero transitorio dispuso que se autoriza un aporte especial adicional de hasta \$120.000 millones el año 2015, 2016, 2017 y de

\$260.000 millones desde el año 2018 hasta el 2022.

De esta manera el subsidio a Transantiago aumentaría en más de 125% en términos reales entre 2013 y 2018. La evasión en los buses de Transantiago se mantiene por sobre el 30%.

Gráfico N° 5
EVOLUCIÓN AL SUBSIDIO
A TRANSANTIAGO
 (MM \$ 2017)



12. Subsidio al gas en Magallanes

Para el próximo año, habría una reducción de las transferencias a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de un 12,3%. Esta transferencia corresponde al aporte compensatorio para que ENAP pueda vender el gas en la región de Magallanes a un precio que es menor (cerca de un 50%) de su costo.

Las razones que dio el Ministro para reducir este aporte son 3:

- 7,2% se reduciría por un efecto del tipo de cambio (para 2017 era \$700 y para 2018 sería \$650).
- 2,2% se reduciría por el ingreso del Parque Eólico Cabo Negro.
- 2,9% restante se daría por una mayor eficiencia de ENAP, que tendría menores costos unitarios de producción de gas.

Es importante ahondar más en el tema debido a que imprevistos como alzas en el valor del dólar, problemas con el parque eólico u otras factores obligarían a un mayor desembolso que el presupuestado para que se mantenga el subsidio.

13. Fondo de sustentación del precio del Cobre para la Pequeña Minería

Históricamente, para suavizar el ciclo del precio del dólar que sufre la pequeña minería, la ENAMI ha administrado este fondo que funciona como un crédito en torno al precio del metal.

Sin embargo, a fines de 2016 el Gobierno ingresó un Proyecto de Ley para que este fondo sea una ley permanente y no tenga que aprobarse y competir año a año con otros recursos del presupuesto. Dado esto, se eliminó el monto correspondiente al fondo en la ley de presupuestos para el próximo año, lo que explica la reducción del 34,6% real que sufre el Ministerio de Minería.

El problema es que se eliminó este fondo del Presupuesto 2018, pese a que aún no se encuentra aprobada la ley (Segundo Trámite, en el Senado), de manera que se actuó bajo el supuesto de que este año de todas maneras se aprobaría el fondo y se desconoce dónde se encuentran tales recursos.

14. El SERVIU Metropolitano amplía atribuciones y crea una sociedad

Desde el presupuesto 2016 se han presentado cambios importantes en las glosas del SERVIU, las que evidencian señales de un rol más activo del Estado en el desarrollo de la política habitacional, de la entrega de subsidios habitacionales a la construcción de viviendas sociales o la entrega de préstamos (como una institución financiera).

En el Presupuesto 2018 se crea una nueva Glosa 05 en el Serviu Metropolitano, a través de la cual "El Serviu Metropolitano podrá transferir el terreno correspondiente al Portal Bicentenario a una sociedad que constituirá aplicando las facultades que corresponden como sucesor de la Corporación de Mejoramiento Urbano. Esta sociedad podrá constituirse con el Fisco, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de Cerrillos, el Parque Metropolitano y el Gobierno Regional Metropolitano, y su directorio contará con dos representantes del Serviu uno de cada socio y uno elegido por los dos anteriores de una terna que confeccione el Consejo de Alta Dirección Pública. El gerente será elegido por el Directorio de una terna confeccionada por el mismo Consejo. Tanto los integrantes del

Directorio como el Gerente deberán contar con experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. El objeto de esta sociedad será desarrollar el proyecto «Ciudad Parque Bicentenario» y para estos efectos contará con las amplias facultades, entre ellas la adquisición, arrendamiento, enajenación y constitución de derechos y gravámenes sobre inmuebles, la contratación de obras de construcción y urbanización y la entrega de concesiones a privados, incluso la de viviendas sociales para su arrendamiento conforme los programas del MINVU. El proyecto deberá cumplir con el plan de desarrollo y los estándares urbanos, de sustentabilidad y de integración social que apruebe el MINVU a propuesta del Directorio. Asimismo, deberá autofinanciarse y devolver al Serviu todos los recursos que éste invierta en su desarrollo. Una vez que el terreno haya sido completamente enajenado a terceros o concesionado la sociedad se disolverá, liquidándose el patrimonio y repartiéndose en proporción a los aportes de cada socio, quedando como sucesor el Serviu Metropolitano. La sociedad estará sujeta a las normas sobre probidad, transparencia, conflictos de intereses y fiscalización de Contraloría General de la República que sean aplicables a las empresas públicas, y deberá enviar un balance anual auditado al Congreso Nacional antes de la aprobación de cada Ley de Presupuestos, el que también dará cuenta del estado de avance del plan de desarrollo.”.

15. Disminuyen los Recursos para el Ingreso Ético Familiar

Disminuyen los recursos para el Programa IEF un 9,3%, esto es, de \$126.702 a \$114.969 millones de pesos. En especial, dicha reducción se explica por la disminución en un 21% del presupuesto para el Programa Eje, de \$4.873 a \$3.828 millones de pesos. Cabe hacer presente que el Programa Eje, tiene recursos en IEF como en FOSIS.

Es preocupante esta baja pues este programa es el que tiene como objetivo diagnosticar la situación de los beneficiarios del IEF, para luego definir las estrategias generales de la intervención, además del seguimiento y monitoreo de las prestaciones comprometidas por el programa a los usuarios y la evaluación final de los resultados obtenidos, considerando las metas de la persona y los objetivos del programa y está focalizado en las familias de extrema pobreza, quienes debieran ser un grupo prioritario para la política social. Para el 2017 se proyecta una población de 103.410 familias.

Cabe hacer presente que el IEF fue creado por la Ley N° 20.595 que Establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea subsidio al empleo de la mujer, el año 2012, y tiene como objeto brindar seguridades y oportunidades a las personas y familias que participen en él, de modo de promover el acceso a mejores condiciones de vida, todo ello para lograr la superación de la pobreza en el país ■■■

VI. **TEXTO DEL** PROYECTO DE LEY

Artículos 1º y 2º, véase Cap. III - Contenido del Proyecto de Ley (pág.6)

Artículo 3.- Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por la cantidad de US\$ 7.000.000 miles que, por concepto de endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales de la Nación.

Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US\$ 1.500.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

Para los fines de este artículo, se podrá emitir y colocar bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2018 y aquéllas que se contraigan para efectuar pago anticipado total o parcial de deudas constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en esta ley para el año 2018, no serán consideradas en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.

No se imputarán a la suma de las cantidades señaladas en los incisos primero y segundo de este artículo, las obligaciones que se contraigan para solventar el pago de bonos de reconocimiento a que alude el artículo tercero transitorio¹ del decreto ley N°3.500, de 1980, hasta por un monto del equivalente a US\$ 1.000.000 miles.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones que se contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.

¹ Artículo 3º.- Las instituciones de previsión del régimen antiguo emitirán un título de deuda expresado en dinero que se denominará Bono de Reconocimiento y será representativo de los períodos de cotizaciones que registren en ellas los imponentes que se incorporen al Sistema que establece esta ley.

El Bono de Reconocimiento podrá emitirse en forma material, mediante un documento que cuente con las características necesarias para impedir su falsificación, o desmaterializadamente; esto es, sin que sea necesaria la impresión de una lámina física en la que conste el Bono respectivo, no afectándose por ello la calidad jurídica ni la naturaleza de los Bonos.

Los Bonos que se emitan bajo la modalidad desmaterializada deberán depositarse en una empresa de depósito de valores autorizada por la ley N° 18.876. Para estos efectos, las instituciones de previsión emisoras deberán acordar con una empresa de depósito de valores autorizada por la citada ley, que no emitirán Bonos en forma material sino que llevarán en sus registros un sistema de anotaciones en cuenta a favor de la empresa, y que ésta se encargará de llevar los registros de los tenedores de los Bonos de Reconocimiento. Bajo el mismo acuerdo y condiciones, se podrá convenir la desmaterialización de los Bonos de Reconocimiento emitidos originalmente de forma material.

La impresión física de un documento en el que conste el Bono de Reconocimiento sólo será procedente en los casos en que esté autorizada por la ley N° 18.876 o por las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Dicha impresión deberá contar con las características necesarias para impedir su falsificación y su costo será de cargo del requirente. Se entiende por instituciones de previsión del régimen antiguo, aquéllas existentes a la fecha de publicación de esta ley.

Artículo 4.- En conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 26² del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones de seguridad social, Transferencias corrientes, Integros al Fisco y Otros gastos corrientes incluidos en el artículo 1 de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos Subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28³ del decreto ley N° 1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21⁴ del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según corresponda.

Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades aprobadas en el citado artículo 1, de los Subtítulos de Adquisición de activos no financieros, Iniciativas de inversión y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan de las referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.

Artículo 5.- Durante el año 2018, la aplicación de la letra d)⁵ del artículo 87 del decreto con fuerza de ley N 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, respecto de la

2 ARTICULO 26° Las normas sobre traspasos, incrementos o reducciones y demás modificaciones presupuestarias serán establecidas por decreto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Estas normas podrán ser modificadas por decreto fundado durante el ejercicio presupuestario.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, sólo por ley podrá autorizarse la transferencia de fondos entre Ministerios, el traspaso a las diferentes partidas de la Ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas al Tesoro Público, aportes a las empresas del Estado, sean públicas o sociedades anónimas, no incluidas en dicha ley y la concesión de aporte fiscal a municipalidades.

(Inciso tercero) Igualmente, sólo por ley podrá autorizarse el incremento de las sumas globales de gasto que la Ley de Presupuestos fijará anualmente. Para este efecto, la referida ley deberá establecer, de acuerdo a los conceptos que considere su estructura y el clasificador presupuestario en aplicación, los gastos que se comprenderán en dichas sumas globales, aquellos que se exceptuarán, y los márgenes de aumento de los gastos de capital no financieros que se eximirán de autorización legal.

3 ARTICULO 28° El Ejecutivo podrá ordenar pagos, excediéndose de las sumas consultadas en los rubros correspondientes, en los casos que a continuación se indican:

- 1.- Para el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas dictadas por autoridad competente.
- 2.- Para devolver impuestos, contribuciones y derechos que el Estado deba reintegrar por cualquier causa.
- 3.- Para atender el servicio de la deuda pública.
- 4.- Para pago de jubilaciones, pensiones y montepíos y, en general, gastos de previsión social.

Los excesos a que se refiere el inciso precedente, deberán ser financiados con reasignaciones presupuestarias o con mayores ingresos.

4 Artículo 21°- Los ingresos y/o gastos aprobados por leyes sancionadas durante el ejercicio presupuestario, como también aquellos autorizados por leyes de años anteriores que no hubieren sido incluidos en la Ley de Presupuestos, se incorporarán al presupuesto vigente. Por decreto se determinará la ubicación que dentro de la clasificación presupuestaria corresponderá a dichos ingresos o gastos.

5 Artículo 87.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior [incompatibilidad entre empleos regidos por el Estatuto Administrativo], el desempeño de los cargos a que se refiere el presente Estatuto será compatible:

d) Con la calidad de subrogante, suplente o a contrata.

compatibilidad en el desempeño de cargos de planta regidos por dicha ley con la designación en cargos a contrata en el mismo servicio, requerirá la autorización previa de la Dirección de Presupuestos, la que verificará la disponibilidad presupuestaria para ello en el Servicio respectivo. Dicha autorización se requerirá asimismo para la contratación de personal suplente en los cargos de planta que no se encuentren desempeñados por su titular en virtud de la aplicación del mecanismo anterior.

Lo dispuesto en este artículo no regirá respecto de la renovación de los contratos que gozaron de compatibilidad en el año 2017.

Artículo 6.- La propuesta o licitación pública será obligatoria respecto de los proyectos y programas de inversión y de los estudios básicos a realizar en el año 2018, cuando el monto total de éstos, contenido en el decreto o resolución de identificación, sea superior al equivalente en pesos de mil unidades tributarias mensuales respecto de los proyectos y programas de inversión, y de quinientas de dichas unidades en el caso de los estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de emergencia contempladas en la legislación correspondiente. Tratándose de los incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez mil unidades tributarias mensuales para los proyectos y programas de inversión y de tres mil de tales unidades en los estudios básicos.

Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de Hacienda.

Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, que incurran en incumplimientos de las leyes laborales y previsionales durante el desarrollo de tales contratos, y sin perjuicio de las sanciones administrativas existentes, serán calificadas con nota deficiente en el área de administración del contrato. Esta calificación pasará a formar parte de los registros respectivos y se considerará en futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos.

Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberán acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En el evento que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte.

Artículo 7.- En los decretos que contengan transferencias, hayan sido dispuestas en esta ley o se creen en virtud del artículo 26⁶ del decreto ley N° 1.263, de 1975, con imputación a los ítems 01, 02 y 03, de los Subtítulos 24, Transferencias Corrientes, y 33, Transferencias de Capital, de este presupuesto, para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que la institución receptora deberá dar a los recursos, las condiciones o modalidades de reintegro de los mismos y la

6 ARTÍCULO 26° Las normas sobre traspasos, incrementos o reducciones y demás modificaciones presupuestarias serán establecidas por decreto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Estas normas podrán ser modificadas por decreto fundado durante el ejercicio presupuestario.

No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, sólo por ley podrá autorizarse la transferencia de fondos entre Ministerios, el traspaso a las diferentes partidas de la Ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas al Tesoro Público, aportes a las empresas del Estado, sean públicas o sociedades anónimas, no incluidas en dicha ley y la concesión de aporte fiscal a municipalidades.

Igualmente, sólo por ley podrá autorizarse el incremento de las sumas globales de gasto que la Ley de Presupuestos fijará anualmente. Para este efecto, la referida ley deberá establecer, de acuerdo a los conceptos que considere su estructura y el clasificador presupuestario en aplicación, los gastos que se comprenderán en dichas sumas globales, aquellos que se exceptuarán, y los márgenes de aumento de los gastos de capital no financieros que se eximirán de autorización legal.

información que respecto de su aplicación deberá remitirse al organismo que se determine. Con todo, los saldos de recursos transferidos en el ejercicio anterior, no utilizados por los organismos receptores y que deban ser reintegrados, deberán ser ingresados a Rentas Generales de la Nación.

Aquellas transferencias, incluidas en el Subtítulo 24, que constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejecución presupuestaria en los distintos conceptos de gasto, con visación de la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe sobre avance de actividades, conjuntamente con la información de ejecución presupuestaria. Dicho desglose constituirá la autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las modificaciones que se le introduzcan mediante igual procedimiento. La visación podrá efectuarse a contar de la fecha de publicación de esta ley. Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados no podrán incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto.

Artículo 8.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y en los de inversión regional de los gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.

Artículo 9.- No obstante la dotación máxima de personal o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los servicios públicos, por decreto supremo expedido por intermedio del ministerio del ramo, el que deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse la dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos con cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la dotación máxima o número de horas semanales del conjunto de los servicios del Ministerio respectivo.

Asimismo, podrán aumentarse los cupos de honorarios fijados en este presupuesto a los servicios públicos y programas presupuestarios, con cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse los cupos de honorarios del conjunto de los servicios del Ministerio respectivo⁷.

Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos podrán contratar personal que reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier razón, se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un periodo superior a treinta días corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán efectuarse si la entidad cuenta con disponibilidad de recursos para tal efecto, lo que deberá ser certificado por la autoridad superior de la institución, sobre la base del informe de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto administrativo.

⁷ El artículo 9° del proyecto de Ley de Presupuestos coincide, en su inciso primero, con el artículo 9° del presupuesto vigente para 2017; pero carece del inciso segundo que ahora se introduce para el presupuesto de 2018.

Artículo 11.- Para los efectos de proveer durante el año 2018 las vacantes de los cargos a que se refiere el artículo cuadragésimo octavo⁸ de la ley N° 19.882, se convocará a los procesos de selección a través de los sitios web institucionales u otros que se creen, donde se dará información suficiente, entre otras materias, respecto de las funciones del cargo, el perfil profesional, las competencias y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que deberán acreditarse los requisitos. Adicionalmente, se publicarán en diarios de circulación nacional, avisos de la convocatoria del proceso de selección, los que deberán hacer referencia a los correspondientes sitios web para conocer las condiciones de postulación y requisitos solicitados.

Artículo 12.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para adquirir, a cualquier título, toda clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio.

Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados para tomar en arrendamiento tales vehículos o para convenir, mediante cualquier tipo de contratos, que éstos les sean proporcionados por la otra parte, para su utilización en funciones inherentes al servicio.

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el siguiente inciso, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.

La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a la disminución de la dotación máxima de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se trate.

En el decreto supremo respectivo podrá disponerse el traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.

8 ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Para los efectos de proveer las vacantes de cargos de alta dirección, el Consejo de Alta Dirección Pública, por intermedio de la Dirección Nacional del Servicio Civil, convocará a un proceso de selección público abierto, de amplia difusión, que se comunicará, a lo menos, mediante avisos publicados en diarios de circulación nacional, en medios electrónicos a través de las páginas web institucionales u otras que se creen y en el Diario Oficial. En los anuncios se dará información suficiente, entre otros factores, respecto de las funciones del cargo, el perfil profesional, las competencias y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que deberán acreditarse los requisitos.

Prohíbese todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones o preferencias basadas en motivos diferentes de los méritos, calificaciones, competencias y aptitudes exigidas para el desempeño del respectivo cargo. Todos los postulantes a un cargo participarán en el proceso de selección conforme a procedimientos uniformes y en igualdad de condiciones.

Artículo 13.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56⁹ del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2018 el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas en años anteriores, se incorporarán transitoriamente como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes objetivos:

- 65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión;
- 10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y
- 25% a beneficio fiscal, que ingresará a Rentas Generales de la Nación.

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente.

No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, o la proporción correspondiente si la venta fuere parcial.

En el caso de los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas, las aplicaciones que se efectúen con cargo a los recursos provenientes de las enajenaciones, se incorporarán anualmente en la Ley de Presupuestos, en los respectivos capítulos de la Partida del Ministerio de Defensa Nacional, identificando los ingresos y gastos estimados en cada caso. Los recursos sólo podrán emplearse en proyectos de infraestructura, incluidos proyectos de inversión social, tales como habitabilidad y mejoramiento de las condiciones de vida de todo el personal integrante de estas instituciones, y en proyectos de infraestructura militar.

Trimestralmente el Ministerio de Defensa Nacional deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de las enajenaciones de los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas.

9 12 Artículo 56.- Mediante la destinación se asigna, a través del Ministerio, uno o más bienes del Estado a la institución que los solicita, con el objeto de que los emplee en el cumplimiento de sus fines propios.

Las destinaciones sólo se dispondrán en favor de los servicios y entidades que conforman la Administración del Estado, el Poder Judicial, los servicios dependientes del Congreso Nacional y la Contraloría General de la República.

Todos los gastos que provengan de reparaciones, conservación, ejecución de obras y pagos de servicios tales como agua potable, alcantarillado, electricidad, teléfono, gas, contribuciones y otros a que estén afectos los bienes destinados, serán de cargo exclusivo de los destinatarios.

El Ministerio de Bienes Nacionales estará facultado para cobrar por el uso y goce de los bienes destinados a que se refiere este artículo, con excepción de aquellos destinados a los servicios dependientes del Congreso Nacional. Mediante decreto supremo expedido por este Ministerio, el que deberá ser suscrito además por el Ministerio de Hacienda, se establecerán las condiciones, el procedimiento, la forma de cobro y demás normas necesarias para la aplicación de esta disposición. El producto obtenido por el cobro señalado ingresará a rentas generales de la Nación.

Los bienes destinados deberán ser empleados exclusivamente en el objeto para el cual se solicitaron. Si por cualquier motivo dejaren de utilizarse en dicho objeto, deberán ser puestos de inmediato a disposición del Ministerio de Bienes Nacionales para su debida administración. El Ministerio fiscalizará el empleo debido que se dé a estos bienes, pudiendo poner término a la destinación cada vez que las circunstancias así lo aconsejen.

Artículo 14.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los informes y documentos que se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación se indican:

1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo mes.
2. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de financiamiento y saldo de la deuda bruta del Gobierno Central.

Del mismo modo, se deberá incluir, en anexos, información del gasto devengado en el Gobierno Central del Subtítulo 22 ítem 07, Publicidad y Difusión, desagregado por asignación, detallando el gasto por partida y su variación real respecto de igual trimestre del año anterior, y de las asignaciones comprendidas en los Subtítulos 24 y 33, para cada uno de los programas de esta ley.

3. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las Partidas de esta ley, al nivel de Partidas, Capítulos y Programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado en presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
4. Copia de los decretos de modificaciones presupuestarias totalmente tramitados durante cada trimestre y un informe consolidado de las modificaciones presupuestarias efectuadas en dicho trimestre, especificando los montos incrementados o disminuidos por Subtítulo y Partida, dentro de los treinta días siguientes al término del mismo.
5. Copia de los balances anuales y estados financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile y de todas aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas; y de las entidades a que se refiere la ley N° 19.701¹⁰. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
6. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los sesenta días y noventa días siguientes al término del correspondiente semestre, respectivamente.
7. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban con organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo 3 de esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.
8. Informe trimestral sobre los Activos Financieros del Tesoro Público, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. Dicho informe deberá detallar también los activos financieros provenientes del Fondo de Apoyo Regional.

10 Institutos Tecnológicos de la CORFO.

9. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social, dentro de los noventa días siguientes al término del respectivo trimestre.
10. Informe trimestral de las operaciones de cobertura de riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo 5¹¹ de la ley N°19.908, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.

Para dar cumplimiento a lo señalado en los numerales anteriores, la información indicada deberá ser entregada por los organismos correspondientes de conformidad a las instrucciones impartidas para tal efecto por la Dirección de Presupuestos. Además, ésta deberá ser publicada en los mismos plazos en los respectivos sitios web de los organismos obligados a proporcionarla.

Toda información que en virtud de otras disposiciones de esta ley deba ser remitida a las Comisiones del Senado, de la Cámara de Diputados y Especial Mixta de Presupuestos, será proporcionada por los respectivos organismos. En el caso de la Cámara de Diputados dicha información se proporcionará a través del Departamento de Evaluación de la Ley, para su trabajo y remisión a quien lo solicite.

11 14 Artículo 5°.- Autorízase al Fisco y a los servicios y demás instituciones que forman parte del Sector Público en los términos definidos por el decreto ley N° 1.263, de 1975, exceptuados los gobiernos regionales y municipalidades, para cubrir sus riesgos financieros. Cada cobertura deberá estar relacionada con un activo o pasivo existente. Para tal efecto, se faculta a dichas entidades públicas para celebrar contratos de "swap", futuro y "forward" de tipo de cambio y de tasa de interés.

Las operaciones de cobertura de riesgo autorizadas, no podrán exceder en términos de monto y plazo al de los respectivos activos o pasivos. Sin perjuicio de lo anterior, la suma de los montos involucrados en estas operaciones no podrá exceder el monto total que para cada período se autorice por ley.

Cualquier modificación a las condiciones financieras de una operación, se considerará que constituye una nueva operación.

Por medio de decreto emanado del Ministerio de Hacienda y expedido bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", se señalarán los procedimientos de control, seguridad, fiscalización y contabilidad separada de cada operación.

Sin perjuicio de lo anterior, cada operación que al amparo de este artículo, realicen los servicios y demás instituciones que forman parte del Sector Público, sólo podrá iniciarse previo oficio específico que así lo indique del Ministerio de Hacienda. El referido oficio deberá señalar las razones que justifican la contratación de la operación autorizada, incluyendo las que se fundamentan en los riesgos asociados a descargos de flujos de ingresos o gastos u otros flujos relacionados con activos o pasivos.

El Ministerio de Hacienda efectuará el análisis, las negociaciones, las licitaciones, la revisión legal de documentación especializada y el registro de cada una de estas operaciones financieras que emprendan los servicios y demás instituciones que forman parte del Sector Público. Los respectivos contratos serán firmados por el Ministro de Hacienda y quien represente a la entidad autorizada. En este caso, la firma del Ministro de Hacienda no constituirá garantía del Fisco.

La representación del Fisco en las operaciones que en cumplimiento de este artículo éste realice directamente, podrá ser delegada por el Presidente de la República en el Ministro de Hacienda.

Los términos y condiciones financieras que sean negociados para la contratación de las operaciones, deberán ajustarse en todo a las que prevalezcan en el mercado al tiempo de su contratación.

La contraparte de las operaciones deberá encontrarse clasificada por entidades clasificadoras de riesgos de reconocido prestigio internacional, en una categoría igual o superior a la que posea la República de Chile a la fecha de aprobación de la presente ley. En caso de contratarse a través de bolsas de valores o con cámaras de compensación, éstas deberán gozar de un reconocido prestigio internacional en función de los volúmenes transados en ellas, número de operaciones y sofisticación de sus plataformas contractuales y tecnológicas.

La contraparte deberá, además, ser seleccionada previa licitación. Sin embargo, si por razones de mercado el Ministerio de Hacienda considera que una licitación afectará la operación, podrá acudir al trato directo. En el caso que se utilice este último procedimiento, el Ministerio de Hacienda procurará mantener una rotación de sus contrapartes. Las operaciones podrán terminarse anticipadamente. En estos casos, y para los efectos del límite autorizado por ley, del monto total de operaciones celebradas no se descontarán los montos involucrados en aquellas que terminen por el mutuo consentimiento de las partes.

Los ingresos extraordinarios que se perciban producto de cláusulas especiales incorporadas a los contratos, serán depositados en una cuenta especial destinada a hacer frente a eventuales desembolsos extraordinarios que deban efectuarse producto de las mismas cláusulas. Por su parte, si como resultado de una terminación anticipada se generaren ingresos, éstos serán depositados en una cuenta especial destinada exclusivamente a operaciones de cobertura de riesgos financieros.

Las operaciones, incluyendo su evolución, deberán ser informadas dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo semestre calendario, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos a que se refiere el artículo 19 de la ley N° 18.918.

Las operaciones reguladas por el presente artículo no constituirán deuda pública para los efectos de la aplicación de las normas del Título IV del decreto ley N° 1.263, de 1975, y, en consecuencia, se registrarán exclusivamente de acuerdo a lo dispuesto en este artículo.

No les será aplicable lo dispuesto en el presente artículo, a las empresas regidas por el artículo 11 de la ley N° 18.196.

Artículo 15.- Durante el año 2018, la suma de los montos involucrados en operaciones de cobertura de riesgos financieros que celebren las entidades autorizadas en el artículo 5¹² de la ley N° 19.908, no podrá exceder de US\$1.500.000 miles o su equivalente en moneda nacional. Tales operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada norma legal.

Artículo 16.- Durante el año 2018, el Presidente de la República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que emitan las empresas del sector público y universidades estatales, hasta por la cantidad de US\$300.000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante uno o más decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, indicando las fuentes de los recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda.

Las garantías que otorgue el Estado en conformidad con este artículo se extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen los créditos y los bonos mencionados precedentemente, comisiones, contratos de canje de monedas y demás gastos que irroguen, cualquiera sea su denominación presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas obligaciones.

Las empresas señaladas en el inciso primero, para obtener la garantía estatal señalada, deberán suscribir previamente un convenio de programación con el Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción, en que se especificarán los objetivos y los resultados esperados de su operación y programa de inversiones, en la forma que se establezca mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda. A estos convenios les será aplicable la disposición del inciso segundo del artículo 2¹³ de la ley N° 19.847.

Autorízase a las universidades estatales para contratar, durante el año 2018, empréstitos por períodos de hasta veinte años, de forma que, con los montos que se contraten, el nivel de endeudamiento total en cada una de ellas no exceda del setenta por ciento (70%) de sus patrimonios. El servicio de la deuda se realizará con cargo al patrimonio de las mismas universidades estatales que las contraigan. Estos empréstitos deberán contar con la visación previa del Ministerio de Hacienda. Con todo, los empréstitos no comprometerán de manera directa ni indirecta el crédito y la responsabilidad financiera del Estado.

La contratación de los empréstitos que se autorizan a las universidades estatales no estará sujeta a las normas de la ley N° 19.886¹⁴ y su reglamento. En todo caso, las universidades deberán llamar a propuesta pública para seleccionar la o las entidades financieras que les concederán el o los empréstitos.

12 Véase nota al N°10 del artículo anterior.

13 Artículo 2°.- Las empresas del Estado, incluidas las entidades a que se refiere el artículo 11 de la ley N° 18.196, para obtener la garantía estatal señalada en el artículo precedente, deberán suscribir previamente un convenio de programación con el Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción, en que se especificarán los objetivos y los resultados esperados de su operación y programa de inversiones, en la forma que se establezca mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda.

El Comité Sistema de Empresas antes señalado deberá entregar en el mes de mayo de cada año, al Presidente de la República y al Congreso Nacional, un informe de gestión del año precedente, que incluirá el desempeño económico y financiero de todas las empresas a las cuales presta asesoría técnica y, en el caso de aquellas empresas sujetas a convenios de programación, una evaluación específica de su grado de cumplimiento.

14 Ley sobre Contratos Administrativos de Suministro.

Copia de los antedichos empréstitos, indicando el monto y las condiciones bajo las cuales fueron suscritos, además de un informe que especifique los objetivos y los resultados esperados de cada operación y su programa de inversiones asociado, serán enviados al Ministerio de Educación y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al de su contratación.

Artículo 17.- Los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del ministerio del ramo, visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, para afiliarse o asociarse a organismos internacionales, renovar las afiliaciones existentes o convenir aumento de sus cuotas. En el evento que la incorporación o renovación les demande efectuar contribuciones o aportes o aumentos de éstos y si los convenios consisten en aumentos del monto de cuotas, su visación quedará condicionada a la disponibilidad de recursos fiscales.

Artículo 18.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70¹⁵ del decreto ley N° 1.263, de 1975.

Las aprobaciones, visaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúe por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22¹⁶ y 24¹⁷ del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo final¹⁸ del inciso segundo del artículo 8 del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el artículo

15 Artículo 70.- Las materias que de acuerdo a las disposiciones del presente decreto ley deben sancionarse por decreto, serán cumplidas por el Ministro de Hacienda, bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República".

16 Artículo 22.- Los servicios, instituciones y empresas de la administración civil del Estado, en cuyos presupuestos figure el ítem destinado a la adquisición de vehículos motorizados y cuenten con recursos disponibles al efecto, necesitarán autorización previa del Ministro de Hacienda, solamente cuando se trate de la adquisición de automóviles y station wagons.

Las adquisiciones o bajas de vehículos motorizados destinados al transporte por tierra, de pasajeros o de carga serán sancionadas sólo por Resolución fundada del Jefe Superior del respectivo organismo, sujetas, cuando corresponda, a la norma del artículo 6° letra b) del decreto con fuerza de ley N° 353, de 1960 y a las dotaciones máximas pertinentes.

17 Artículo 24.- Mediante decreto supremo, expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, se podrá eximir a uno o más servicios, instituciones y empresas del Estado de la obligación de mantener sus recursos monetarios en la Cuenta Unica Fiscal.

Asimismo, con el procedimiento establecido en el inciso primero, podrá eximirse a determinadas Municipalidades de la obligación que les impone el artículo 22 de la ley N° 15.077 [depositar solamente en el Banco del Estado].

18 Artículo 8°.- Autorízase la enajenación de toda clase de activos, muebles o inmuebles, corporales o incorporeales, del Fisco y de las Instituciones o empresas descentralizadas del sector público, que no sean imprescindibles para el cumplimiento de fines de la entidad respectiva.

Las ventas a que se refiere el inciso anterior, inclusive en lo que dice relación con los bienes fiscales destinados en favor de los servicios y entidades que conforman la Administración del Estado, serán dispuestas por resolución del Jefe Superior del organismo correspondiente, previa autorización del Ministerio del ramo. Tratándose de la enajenación de bienes inmuebles fiscales se requerirá de la autorización previa del Ministro de Hacienda.

4¹⁹ de la ley N°19.896, la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9²⁰ de la ley N°19.104 y el artículo 14²¹ de la ley N°20.128, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quien podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos.

Las visaciones dispuestas en el artículo 5²² de la ley N° 19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los gobiernos regionales, en el propio Intendente.

19 Artículo 4°.- Otórgase a los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al cumplimiento de actividades o funciones que les competan.

No obstante lo anterior, dichas entidades públicas requerirán de autorización previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el inciso precedente o la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislación que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en especie o dinero, en situaciones de emergencia o calamidad pública, aquellas cuyo valor o monto no exceda al equivalente en moneda nacional de 250 unidades tributarias mensuales al momento del ofrecimiento y las que recaigan sobre bienes sujetos a próximo deterioro o descomposición.

El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaria conforme a las instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones consistentes en bienes pasarán a formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente, sin perjuicio del cumplimiento de las regulaciones a que se encuentre afecto el acto jurídico respectivo.

Tratándose de donaciones de cooperación internacional o de convenios de cooperación o asistencia técnica no reembolsable, los órganos y servicios públicos mencionados en el inciso primero se entenderán facultados para pagar los impuestos, contribuciones, derechos o gravámenes, establecidos en la legislación chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio o contrato, hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente de cooperación extranjera envíe a Chile, a su propia costa, para desarrollar actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se limitará al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario o retribución.

Los pagos que se efectúen de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, podrán ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora correspondiente, reembolso al organismo o ente internacional donante, o bien su reembolso o pago al sujeto de derecho, según el impuesto, contribución, derecho o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentación contenida en el decreto supremo N° 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda.

20 Artículo 9°.- Para los efectos de determinar el valor de las horas extraordinarias que corresponda pagar al personal de la Administración Pública, cuando las asignaciones que se señalan no se encuentren incluidas en dicha determinación, conforme a la legislación vigente:

- a) Incorpórase a su base de cálculo respectiva, a contar del 1° de enero de 1992, el 50% del monto de las siguientes asignaciones que perciba el funcionario: las establecidas por el decreto ley N° 2.411, de 1978 y, según corresponda, en los artículos 6°, 24, 36 y 39, del decreto ley N° 3.551, de 1981, y la asignación especial de la letra a) del artículo 1° del decreto supremo N° 48, de 1988, del Ministerio de Minería, y
- b) A contar del 1° de enero de 1993, además, agrégase a su base de cálculo respectiva el 50% restante del monto de las asignaciones establecidas en los cuerpos legales citados en la letra anterior

El máximo de horas extraordinarias diurnas cuyo pago podrá autorizarse, será de 40 horas por funcionario al mes.

Sólo podrá excederse esta limitación cuando se trate de trabajos de carácter imprevisto motivado por fenómenos naturales o calamidades públicas que hagan imprescindible trabajar un mayor número de horas extraordinarias. De tal circunstancia deberá dejarse expresa constancia en la resolución que ordene la ejecución de tales trabajos extraordinarios. Mediante uno o varios decretos supremos emanados del Ministerio de Hacienda, podrá exceptuarse de la limitación que establece el inciso segundo de este artículo a aquellos servicios que por circunstancias especiales puedan necesitar que determinado personal trabaje un mayor número de horas extraordinarias. En el caso de los organismos cuyos funcionarios perciban la asignación establecida en el artículo 24 del decreto ley N° 3.551, de 1980, la excepción a la limitación referida se dispondrá mediante un decreto alcaldicio fundado. Entre los fundamentos de dicho decreto deberán señalarse los costos que la medida implica para las arcas municipales, con mención específica de los montos involucrados.

21 Artículo 14.- Los órganos y servicios públicos regidos presupuestariamente por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra o adquisición a otro título del bien arrendado y para celebrar cualquier tipo de contratos o convenios que originen obligaciones de pago a futuro por la obtención de la propiedad o el uso y goce de ciertos bienes, y de determinados servicios. Un reglamento emanado de dicho Ministerio, establecerá las operaciones que quedarán sujetas a la referida autorización previa, los procedimientos y exigencias para acceder a ésta y las demás normas necesarias para la aplicación de este artículo.

22 25 Artículo 5°.- Los decretos o resoluciones que aprueben la contratación de personas naturales a honorarios, en los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos, cualquiera que sea el ítem de imputación, deberán contar con visación del Ministerio correspondiente, para lo cual se acompañará un certificado emanado del órgano o servicio respectivo en que conste que el monto comprometido se ajusta a la disponibilidad presupuestaria y, en su caso, a la autorización máxima otorgada en la referida ley para la anualidad respectiva.

El procedimiento señalado en el inciso precedente se aplicará igualmente a las contrataciones en el mismo servicio con aplicación de lo dispuesto en la letra d) del artículo 81 de la ley N° 18.834.

Las personas contratadas a honorarios, bajo cualquier forma que se exprese el pago, deberán informar al o los jefes del servicio respectivo, a través de la unidad correspondiente, mediante una declaración jurada simple, si prestan servicios en cualquier calidad jurídica en otra repartición pública. En tal caso, deberán individualizar al otro Servicio, especificando la calidad jurídica con que laboran en él, el monto de los emolumentos correspondientes, las tareas contratadas y la duración de la prestación de sus servicios. Copia de los antecedentes mencionados deberá ser remitida a la Contraloría General de la República.

Al momento de suscribirse un contrato a honorarios, el Servicio correspondiente tendrá la obligación de requerir la información señalada en el inciso anterior, debiendo el jefe de servicio constatar que no se produzca un actual o eventual conflicto de intereses por el cumplimiento de las funciones contratadas, y certificar tal circunstancia. Se entenderá que hay conflicto de intereses cuando las labores encomendadas en los diversos organismos pongan a la persona a quien se le ha encomendado tareas en ambos, en situación de lesionar los objetivos de cualquiera de esas entidades o cuando sus propios intereses personales puedan pugnar con los de alguna de ellas.

Artículo 19.- Los encargados de los programas presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos, con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico.

Artículo 20.- Cuando los órganos y servicios públicos realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, deberán efectuarlos, al menos en un 25%, en medios de comunicación con clara identificación local, distribuidos territorialmente de manera equitativa. Los órganos y servicios a que se refiere este artículo deberán dar cumplimiento a lo establecido, por medio de sus respectivos sitios web.

Los órganos y servicios públicos a que se refiere este artículo, deberán remitir a más tardar en marzo de 2018 su planificación anual de avisaje y publicaciones al Ministerio Secretaría General de Gobierno, el que monitoreará el cumplimiento de la obligación establecida en el inciso anterior.

Artículo 21.- Será de cargo de las respectivas entidades públicas el siguiente deber de información:

1. Remisión a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte electrónico, de una copia de los informes derivados de estudios e investigaciones contratados en virtud de la asignación 22.11.001, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la recepción de su informe final.
2. En caso de contar con asignaciones comprendidas en los Subtítulos 24 y 33, los organismos responsables de dichos programas deberán publicar en un informe trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre en su sitio web institucional la individualización de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la modalidad de asignación.

Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden a transferencias a municipios, el informe respectivo también deberá contener una copia de los convenios firmados con los alcaldes, el desglose por municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos.

En el caso que una persona tenga más de un contrato a honorarios en entidades públicas, requerirá de la visación previa, en el acto administrativo correspondiente, del ministro respectivo.

La misma visación será exigible cuando la persona contratada a honorarios tenga, además, un contrato con proveedores o contratistas o con instituciones privadas que tengan convenios para ejecución de proyectos o se le hayan otorgado transferencias, en relación con la repartición en que presta servicios.

Se exceptúan de las normas establecidas en los dos incisos anteriores las labores de docencia que dichas personas desarrollen en instituciones de educación superior.

Las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas en los artículos 54, 55 y 56 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, serán aplicables asimismo a los contratados a honorarios, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga.

Del mismo modo, cada jefe de servicio deberá informar a todos quienes vayan a ingresar o laboren en él, en cualquier condición jurídica, acerca de las diversas inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que establecen las leyes, tales como la N° 18.834, Estatuto Administrativo, la N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, y otras que afecten a la repartición correspondiente, como asimismo, las modificaciones legales que se le introduzcan a tal normativa.

Aquellos programas presupuestarios en que laboren mayoritariamente personas contratadas a honorarios, serán regulados por resolución de las entidades correspondientes en cuanto a las condiciones y modalidades de su desempeño.

3. En caso de contar con asignaciones correspondientes al Subtítulo 31, la entidad responsable de la ejecución de los recursos deberá informar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 2018, la nómina de los proyectos y programas financiados con cargo a los recursos señalados, su calendario de ejecución y también, en caso de ser pertinente, su calendario de licitación.
4. Mensualmente, el Gobierno Regional correspondiente deberá informar los estudios básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y que hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis²³ del decreto ley N° 1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio, proyecto o programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro de los treinta días siguientes al término del mes de total tramitación de los respectivos decretos.
5. Publicar en sus respectivos portales de transparencia activa las actas de evaluación emitidas por las comisiones evaluadoras de licitaciones y compras públicas de bienes y servicios que realicen en el marco de la ley N° 19.886²⁴, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo proceso.
6. Trimestralmente, la Subsecretaría de Hacienda enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe sobre la base de la información proporcionada por el Registro Central de Colaboradores del Estado, identificando el total de asignaciones directas ejecutadas en el período a nivel de programa.
7. Informe financiero trimestral de las empresas del Estado y de aquéllas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un balance consolidado por empresa y estado de resultados, a nivel consolidado y por empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción o quien lo suceda o reemplace, y será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.

23 Artículo 19° bis.- Los contratos de estudios para inversiones, de ejecución de obras y de adquisición de materiales y maquinarias, podrán celebrarse para que sean cumplidos o pagados en mayor tiempo que el del año presupuestario o con posterioridad al término del respectivo ejercicio. En estos casos, podrán efectuarse en el año presupuestario vigente, imputaciones parciales de fondos. El servicio público correspondiente sólo responderá de las inversiones hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en cada año, en el respectivo presupuesto.

Para lo dispuesto en el inciso anterior podrán otorgarse anticipos.

Con todo, en los contratos a que se refiere el inciso primero, cualquiera que sea su denominación, no podrá pactarse el pago de todo o parte de su valor o precio en un plazo que exceda del ejercicio presupuestario en que se deba poner término al estudio, proyecto u obra contratado, en una forma distinta a la que resulte de relacionar los pagos con el avance efectivo de la ejecución de los mismos, o cualquier otra forma de pago diferido.

Los estudios preinversionales y los programas o proyectos de inversión deberán contar, como documento interno de la Administración, con informe del organismo de planificación nacional o regional en su caso, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnica económica que analice su rentabilidad. Corresponderá al Ministerio de Hacienda impartir instrucciones y resolver al respecto. No obstante lo anterior, los estudios y proyectos de inversión de las Fuerzas Armadas serán evaluados e informados por el Ministerio de Defensa Nacional, sobre la base de una metodología que se determinará por decreto conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional.

La autorización de recursos para los estudios y programas o proyectos a que se refiere el inciso precedente y la celebración de los contratos respectivos, sólo podrá efectuarse previa identificación presupuestaria. Tal identificación deberá ser aprobada a nivel de asignaciones especiales, por decreto o resolución, según corresponda, conforme a las normas que establezca un reglamento, emanado del Ministerio de Hacienda, el cual establecerá los contenidos de dichos instrumentos aprobatorios, incluido lo relativo a montos por concepto de gasto, compromisos futuros que pueden irrogar y límites máximo, las autoridades facultadas para suscribirlos y los demás procedimientos y modalidades aplicables al efecto.

Sin perjuicio de lo anterior, la dictación de los decretos o resoluciones respectivos podrá efectuarse a contar de la publicación a que se refiere el artículo siguiente y el llamado a propuestas públicas de los estudios y programas o proyectos de que den cuenta, desde su ingreso a la Contraloría General de la República.

Una vez fijado el código y el nombre del estudio, programa o proyectos, en la identificación referida, éstos no podrán ser modificados.

24 LEY DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS.

Artículo 22.- Las actividades de publicidad y difusión que corresponda realizar por los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3²⁵ de la ley N° 19.896. En caso alguno podrán efectuarse campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar los logros de una autoridad específica o del Gobierno en general, con excepción de las cuentas públicas que los organismos señalados en el citado artículo realicen.

Para estos efectos, se entenderá que son gastos de publicidad y difusión, para el cumplimiento de las funciones de los referidos organismos, aquéllos necesarios para el adecuado desarrollo de procesos de contratación; de acceso, comunicación o concursabilidad de beneficios o prestaciones sociales, tales como ejercicio de derechos o acceso a becas, subsidios, créditos, bonos, transferencias monetarias u otros programas o servicios; de orientación y educación de la población para situaciones de emergencia o alarma pública y, en general, aquellos gastos que, debido a su naturaleza, resulten impostergables para la gestión eficaz de los mismos organismos.

Asimismo, los organismos a que se refiere este artículo sólo podrán editar memorias y otras publicaciones por medios electrónicos, salvo que la normativa que las regule indique expresamente que se deben publicar en medios impresos. Asimismo, no podrán incurrir en gastos para la elaboración de artículos de promoción institucional. El gasto por concepto de suscripciones a revistas, diarios y servicios de información, tanto en papel como por medios electrónicos de transmisión de datos, deberá limitarse al que sea estrictamente indispensable para el quehacer de los servicios.

Artículo 23.- Las comisiones de servicio en el país y en el extranjero deberán reducirse a las que sean imprescindibles para el cumplimiento de las tareas institucionales, especialmente aquellas en el extranjero. Salvo motivos justificados, o en el caso de ministros de Estado, los pasajes se deberán comprar a lo menos con 7 días hábiles de anticipación²⁶.

Sólo el Presidente de la República y los ministros de Estado en comisiones de servicio en el extranjero podrán estar acompañados de comitivas, las que, en el caso de los ministros, estarán compuestas por un máximo de dos acompañantes, a excepción del Ministro de Relaciones Exteriores, a quien podrá acompañar un máximo de tres personas. A solicitud de las respectivas instituciones, la Dirección de Presupuestos podrá autorizar excepciones al número de integrantes de las señaladas comitivas.

Trimestralmente se informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las comisiones de servicio en el país y en el extranjero. Estas contendrán en detalle el número de comisiones y cometidos funcionarios, funcionarios designados, destino de ellas, viático recibido y fundamentos de ella, a excepción de aquellas que tengan el carácter de reservadas.

25 Artículo 3º.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.

Cuando no existan todavía prestaciones concretas que corresponda otorgar, el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos dependientes o relacionados con él por intermedio de alguna de las Secretarías de Estado, sólo podrá informar sobre el contenido de los programas y acciones que resuelva propiciar, utilizando medios idóneos a tal efecto. En el caso de las iniciativas de ley, deberá señalar su sujeción a la aprobación legislativa correspondiente.

26 Este plazo, en la ley de presupuestos vigente para 2017, es de 10 días hábiles.

Artículo 24.- Fijase para el año 2018 en 8.000 el número máximo de personas que podrá modificar su calidad jurídica de honorario a suma alzada a contrata, asimilándose al grado de la planta legal del estamento que le corresponda cuya remuneración total le permita mantener su remuneración bruta.

Para efectuar los traspasos señalados, a partir del 1 de enero de 2018, a solicitud de los respectivos servicios e instituciones del Sector Público, la Dirección de Presupuestos podrá modificar el límite máximo de la dotación de personal fijada en las respectivas glosas presupuestarias, con cargo a una compensación equivalente en el número de personas contratadas a honorarios, fijado en las glosas presupuestarias correspondientes, asociadas a los Subtítulos 21 y 24.

Los ajustes derivados de la aplicación de este artículo serán establecidos por medio de decretos del Ministerio de Hacienda, dictados conforme a lo dispuesto en el artículo 70²⁷ del decreto ley N°1.263 de 1975, y deberán ser informados mensualmente, dentro de los treinta días siguientes al mes respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Artículo 25.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de enero del año 2018, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3, y los decretos y resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para posibilitar la ejecución presupuestaria. Esta ley podrá ser publicada en su integridad para su distribución.

Artículo 26.- Los gastos en publicidad y difusión que podrán ejecutarse con cargo a cada Partida presupuestaria durante el año 2018, no podrán superar la suma fijada en el respectivo presupuesto.

Al respecto, en el mes de diciembre de 2017, cada ministerio deberá distribuir estos recursos, por Programa presupuestario, mediante decreto expedido por el ministerio respectivo, el cual deberá llevar además la firma del Ministro de Hacienda. Copia de este decreto, totalmente tramitado, deberá ser enviada a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

No obstante, por decreto del Ministerio de Hacienda, expedido bajo la fórmula establecida en el artículo 70²⁸ del decreto ley N° 1.263, de 1975, podrá aumentarse el monto asignado a un Programa presupuestario para gastos en publicidad y difusión, con cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda en ningún caso, aumentarse, por esta vía, el monto total fijado para la Partida.

Cada ministerio deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el monto ejecutado, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.

27 Véase nota al inciso primero del artículo 18 de este proyecto de ley.

28 Véase nota al inciso primero del artículo 18 de este proyecto de ley.

Artículo 27.- Toda información que de acuerdo a lo establecido en esta ley deba ser remitida a cualquiera de las comisiones del Congreso Nacional se entenderá que debe ser remitida también a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Esta información deberá ser proporcionada en formato digital legible, que no consista solamente en imagen de la respectiva documentación, cuando corresponda.

Toda glosa de información que no señale una fecha de entrega deberá ser remitida antes del comienzo de la tramitación de la ley de presupuestos del sector público para el año siguiente.

